

los acuerdos entre empresa privada y gobiernos son voluntarios; por ello, la pregunta es si sería importante vincular legalmente tales acuerdos.

Según Clapp (2003), el proceso de inserción del sector privado en la gobernanza ambiental se hace a través de canales como el lobby directo, el cual influencia por su poder estructural en la economía y estableciendo auto-regulaciones. El lobby directo al gobierno, antes que envíe delegaciones a negociaciones ambientales, es la forma más tradicional de influencia política, pues de esta forma interviene en las posiciones de gobierno de forma soslayada. Debido a lo anterior, “muchas corporaciones, tanto nacionales como globales, han perseguido esa estrategia en un amplio rango de temas ambientales globales, como cambio climático, agotamiento de ozono y comercio de desechos tóxicos” (Clapp, 2003, p. 3).

Por ejemplo, a través del canal de lobby político para influenciar la agenda de los países se pueden mencionar las recomendaciones brindadas por el INCAE con miras a la Cumbre Presidencial de San Pedro de Sula en 2008. Cuando el sector privado centroamericano reconoció que “el cambio climático es una realidad ineludible y las acciones para enfrentarlo son asimismo impostergables. En dicho momento, el sector privado se pronunció sobre los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio climático, las cuales superará con creces los costos” (INCAE & CCAD, 2008). En el siguiente cuadro se pueden observar las recomendaciones realizadas: